

Tax and Legal News

**Decreto Ejecutivo N°35 de 06 de
septiembre de 2022 que reglamenta la
Ley 23 de 2015, que adopta medidas
para prevenir el blanqueo de capitales,
el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva**

Este decreto indica lineamientos para determinar la posesión, control o influencia significativa; como también las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento de Terrorismo, entre otros.

Entre los criterios se indica que los sujetos obligados identificarán y tomarán medidas razonables para verificar la identidad de su cliente y beneficiario final utilizando fuentes abiertas, independientes y confiables, atendiendo a los siguientes criterios:

- Las personas naturales que en última instancia poseen o controlan, directa o indirectamente, el 10% o más de las acciones, participaciones o derechos de voto en la persona jurídica para los sujetos obligados financieros y el 25% o más para los sujetos obligados no financieros, salvo aquellas que estén listadas en una bolsa de valores en Panamá o de una jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores o de propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un Estado; y las que ejercen el control efectivo final de la persona jurídica a través de otros medios.
- Excepcionalmente, en la medida que no se identifique a una persona natural bajo los criterios anteriores, se debe identificar en lugar de uno u otro a la persona natural que de otra forma ocupa el cargo administrativo superior.
- Tratándose de fundaciones de interés privado, la persona natural que perciba beneficios económicos directos o indirectos de la fundación de interés privado y cualquier otra persona natural que ejerza el control eficaz final sobre la fundación.

Por otro lado, se establece que ante los requerimientos y/o solicitudes de información que realice la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (UAF), se concederá a los sujetos obligados un término máximo de hasta quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del requerimiento o solicitud de la información para que la misma sea remitida a dicha institución, no obstante, se podrá solicitar una solicitud motivada a prórroga ante la UAF para que este conceda, a su discreción, un término adicional.

Entre las disposiciones, se indica que los sujetos obligados deberán asignar a una persona o unidad responsable de servir como enlace con la UAF y el respectivo organismo de supervisión. Es importante mencionar que hasta que esa persona sea designada formalmente, el enlace será el representante legal o la persona natural que ejerce la profesión sujeta a supervisión.

El enlace tendrá entre sus funciones atender los requerimientos y/o solicitudes de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y los organismos de supervisión. Los organismos de supervisión tendrán acceso a los registros de información y documentación de la debida diligencia que se lleven a cabo para la identificación y verificación del cliente y su beneficiario final.

Algunas de las disposiciones reglamentarias que deberán aplicar los sujetos obligados en esta materia con el propósito de afianzar las vías para evitar la propagación de acciones como blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva son las siguientes:

- Definición específica para Perfil Financiero y Perfil Transaccional.
- Medidas pertinentes de debida diligencia (simplificada o ampliada).
- Detalles sobre el proceso de verificación razonable y documentación requerida.
- Comentarios sobre la dependencia en terceros.
- Establecer procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de arma de destrucción masiva.
- Adoptar un manual de prevención de blanqueo para implementar políticas, procedimientos y controles internos para minimizar los riesgos identificados en sus propias evaluaciones de riesgo.
- Considerar los siguientes criterios para determinar un perfil financiero: ingresos fijos y variables de su cliente, frecuencia en que dichos ingresos se reciben por mes, y forma en que se reciben los ingresos.
- Demostrar el contraste entre el perfil financiero y la frecuencia o capacidad de la transacción real de un cliente en uno o varios periodos de tiempo.
- Adoptar medidas de debida diligencia en relaciones contractuales, profesionales o de negocios con sus clientes; en transacciones ocasionales por encima del monto que establezca su respectivo organismo de supervisión, incluso si se trata de varias operaciones posiblemente ligadas; en operaciones inusuales que no sean cónsonas con el perfil del cliente, relacionadas posiblemente con delitos; o cuando existan dudas sobre la veracidad o precisión de los datos de identificación del cliente y el beneficiario final.
- Obligación para los sujetos obligados a reportar operaciones que generen sospecha.

Por su parte, los sujetos obligados no financieros requerirán de su cliente datos como, cartas de trabajo, talonario de pago, estados de cuenta bancarios, declaración de renta, estados financieros y documentación soporte de la transacción realizada por el cliente durante la relación contractual, profesional y/o de negocios, como correspondencia comercial, contratos, recibos de pago y facturas.

Lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo no impide que cada organismo de supervisión, en el ámbito de su competencia y cumplimiento de sus atribuciones, establezca criterios específicos y adecuados a su sector de regulación atendiendo a cada una de las disposiciones contenidas en la normativa. En consecuencia, los organismos de supervisión podrán adoptar Acuerdos, Resoluciones y otras medidas en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a cada uno de los sujetos obligados.

Es relevante indicar que las sanciones disciplinarias, tales como la cancelación, retiro, restricción, suspensión, remoción de las licencias, certificados de idoneidad u otras autorizaciones, serán aplicadas, luego de verificarse los procesos sancionatorios que correspondan. Adicionalmente, indica la norma que en los casos en los cuales el organismo de supervisión está facultado por la Ley, aplicará las sanciones disciplinarias; y por el organismo regulador correspondiente que otorgó la licencia, certificado de idoneidad u otras autorizaciones para el ejercicio de las actividades u operaciones llevadas a cabo por el sujeto obligado, a solicitud del respectivo organismo de supervisión. De igual forma, las sanciones disciplinarias y financieras serán aplicadas por el respectivo organismo de supervisión, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por ley y la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

El Decreto Ejecutivo subroga el Decreto Ejecutivo No.363 de 13 de agosto de 2015, no obstante, sus disposiciones se continuarán aplicando a los procesos sancionatorios iniciados durante su vigencia y hasta la culminación de los mismos.

El Decreto Ejecutivo N°35 de 06 de septiembre de 2022 comenzó a regir desde su promulgación en [Gaceta Oficial](#).

Tax and Legal News

Executive Decree No. 35 of September 6, 2022 regulates Law 23 of 2015, which adopts measures to prevent money laundering, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction

This decree indicates guidelines to determine the possession, control or significant influence; as well as the powers of the Financial Analysis Unit for the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, among others.

Among the criteria it is indicated that the regulated entities will identify and take reasonable measures to verify the identity of their client and final beneficiary using open, independent and reliable sources, according to the following criteria:

- The natural persons who ultimately owns or controls, directly or indirectly, 10% or more of the shares, participations or voting rights in the legal entity for financial reporting entities and 25% or more for non-financial reporting entities, except those that are listed on a stock exchange in Panama or in a jurisdiction recognized by the Superintendence of the Stock Market or owned by an international, multilateral or State organization; and those that exercise final effective control of the legal person through other means.
- Exceptionally, to the extent that a natural person is not identified under the above criteria, the natural person who otherwise occupies the senior administrative position must be identified instead.
- In the case of private interest foundations, the natural person who receives direct or indirect economic benefits from the private interest foundation and any other natural person who exercises final effective control over the foundation.

On the other hand, it is established that before the requirements and/or requests for information made by the Financial Analysis Unit for the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism (UAF for its acronym in Spanish), the reporting entities will be granted a maximum term of up to fifteen (15) business days, counted from the notification of the requirement or request for the information so that it is sent to said institution, however, a reasoned request for an extension may be requested before the UAF so that it grants, at its discretion, an additional term.

Among the provisions, it is indicated that the reporting entities must assign a person or unit responsible for serving as a liaison with the UAF and the respective supervisory body. It is important to mention that until that person is formally designated, the liaison will be the legal representative or the natural person who practices the profession subject to supervision.

One of the functions of the liaison will be to attend to the requirements and/or requests of the Financial Analysis Unit for the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism and the supervisory bodies. The supervisory bodies will have access to the records of information and documentation of the due diligence carried out for the identification and verification of the client and its final beneficiary.

Some of the regulatory provisions that must be applied by regulated entities in this matter in order to strengthen the ways to prevent the spread of actions such as money laundering, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction are the following:

- Specific definition for Financial Profile and Transactional Profile.
- Relevant due diligence measures (simplified or expanded).
- Details about the reasonable verification process and required documentation.
- Comments on dependence on third parties.
- Establish processes to identify, assess, monitor, manage and mitigate the risks of money laundering, financing of terrorism and financing of weapons of mass destruction.
- Adopt a money laundering prevention manual to implement policies, procedures and internal controls to minimize the risks identified in their own risk assessments.
- Consider the following criteria to determine a financial profile: client's fixed and variable income, how often that income is received per month, and how the income is received.
- Demonstrate the contrast between the financial profile and the frequency or capacity of the actual transaction of a client in one or several periods of time.
- Adopt due diligence measures in contractual, professional or business relationships with its clients; in occasional transactions above the amount established by their respective supervisory body, even in the case of several possibly linked operations; in unusual operations that are not consistent with the client's profile, possibly related to crimes; or when there are doubts about the veracity or precision of the identification data of the client and the final beneficiary.
- Obligation for regulated entities to report operations that generate suspicion.

For their part, the non-financial regulated entities will require from their client data such as work letters, payment stubs, bank account statements, income tax returns, financial statements and supporting documentation of the transaction carried out by the client during the contractual, professional relationship and/or business, such as business correspondence, contracts, payment receipts and invoices.

The provisions of this Executive Decree do not prevent each supervisory body, within the scope of its competence and compliance with its powers, from establishing specific and appropriate criteria for its regulatory sector, taking into account each of the provisions contained in the regulation. Consequently, the supervisory bodies may adopt Agreements, Resolutions and other measures on the prevention of money laundering, financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, applicable to each of the regulated entities.

It is relevant to indicate that disciplinary sanctions, such as the cancellation, withdrawal, restriction, suspension, removal of licenses, suitability certificates or other authorizations, will be applied, after verifying the corresponding sanctioning processes. Additionally, the rule indicates that in cases in which the supervisory body is empowered by law, it will apply disciplinary sanctions; and by the corresponding regulatory body that granted the license, suitability certificate or other authorizations for the exercise of the activities or operations carried out by the regulated entity, at the request of the respective supervisory body. Likewise, the disciplinary and financial sanctions will be applied by the respective supervisory body, without prejudice to the other sanctions established by law and the civil or criminal liability that may arise.

The Executive Decree subrogates Executive Decree No. 363 of August 13, 2015. However, its provisions will continue to apply to sanctioning processes initiated during its term and until their completion.

Executive Decree No. 35 of September 6, 2022 came into effect from its promulgation in the [Official Gazette](#).

Contáctenos

Nuestro equipo

Marisol Arcia

Territory Senior Partner
PwC Interaméricas

marisol.arcia@pwc.com

Francisco A. Barrios González

Socio Líder Regional de
Impuestos, Legal y BPO
PwC Interaméricas

francisco.barrios@pwc.com

Yaremis Pérez

Socia de Impuestos y Legal
PwC Panamá

yaremis.perez@pwc.com

Ricardo A. Madrid

Director de BPO
PwC Panamá

ricardo.madrid@pwc.com

Marseda Rakipaj

Socia de Precios de Transferencia
PwC Panamá

marseda.rakipaj@pwc.com

Otros canales

pwc.com/interamericas

- Facebook: <https://es-la.facebook.com/PwCInteramericas/>
- Twitter: https://twitter.com/PwC_Interameric
- LinkedIn: <https://pa.linkedin.com/company/pwc-interamericas>
- Instagram: <https://www.instagram.com/pwccinteramericas/?hl=es>
- YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UC4byblcAsC4gUIRKoFKgsMQ>



El contenido de este boletín es sólo para fines de información general y no debe utilizarse como sustituto de una consulta con asesores profesionales.

© 2022 PricewaterhouseCoopers, S.R.L. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles.